
CAMPOS, Alicia y CARRILLO, Miquel (eds) (2008), *El precio oculto de la tierra*, Icaria, Madrid.

SOBRE MALDICIONES Y BENDICIONES: LOS IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, por Jairo BAQUERO MELO*

En las últimas décadas el debate acerca del impacto que la explotación de los recursos naturales tiene sobre los países que albergan dichos recursos ha ganado importancia. Gracias a los trabajos sobre la denominada “maldición de los recursos naturales” el tema ha adquirido relevancia¹.

El libro *El precio oculto de la tierra* articula varios trabajos sobre este tema, centrados principalmente hacia países donde se explota petróleo y gas, y donde en mayor o menor medida, tienen presencia las empresas multinacionales españolas. Son interesantes las reflexiones planteadas en el libro sobre la dicotomía entre países consumidores y productores de recursos naturales, e ilustra casos entre estos últimos a partir de países africanos y latinoamericanos, recurriendo tanto los análisis realizados desde la academia como desde la sociedad civil.

En el capítulo introductorio de Alicia Campos y Miquel Carrillo, se destaca la literatura sobre la “maldición de los recursos

naturales”, considerando los efectos negativos que su explotación tiene en varios países. Entre otros factores, las causas son: la corrupción, la tendencia autoritaria de los gobiernos de esos países, la formación de un estado rentista y la dependencia del país de un recurso sin preocuparse por desarrollar otros sectores económicos. Además de lo anterior, la explotación de los recursos naturales puede generar la destrucción de comunidades locales y del medio ambiente. Se critica la posición de organismos multilaterales como el Banco Mundial, que consideran que las industrias extractivas tienen el potencial de beneficiar a todos los grupos sociales involucrados en su explotación, tanto en países consumidores como productores. Para los autores, estos organismos deberían reconocer que existen múltiples intereses en conflicto.

En los países consumidores, las acciones que el estado y las empresas transnacionales llevan a cabo en el exterior se dirigen a buscar la satisfacción de la demanda de recursos energéticos sin llegar a cuestionar los impactos en otras sociedades. Miquel Ortega expone varios indicadores para

¹ Véanse por ejemplo los trabajos de Terry Lynn Karl, entre otros.

mostrar que los principales países que abastecen de materias primas a España presentan bajos niveles de democracia y altos niveles de corrupción. España realizó importantes inversiones en América Latina gracias a las privatizaciones que tuvieron lugar en los años noventa y las empresas españolas han aumentado su presencia en África. Pero la política exterior española debería integrar en mayor medida mecanismos que busquen reducir los impactos negativos a nivel sociopolítico y ambiental en dichos países.

La “transparencia” ha sido propuesta como el antídoto para contrarrestar la maldición de los recursos naturales. Como exponen en su capítulo Belén Díaz y Marc Niñerola, los países ricos en recursos tienden a presentar sistemas financieros poco preparados para gestionar las rentas de hidrocarburos, a lo que se suma la opacidad en las negociaciones entre multinacionales y gobiernos así como en las transacciones financieras y los pagos realizados a los gobiernos. Campañas como la de *Hagan Público lo que Pagan* (PWYP) y la *Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas* (EITI) buscan reducir la corrupción con la transparencia y con ello, aumentar las posibilidades de desarrollo en dichos países. Pero uno de los principales obstáculos a este objetivo es la negativa de las multinacionales a revelar información sobre sus transacciones. Como señalan los autores, actores como las agencias internacionales de crédito, los países donantes y los gobiernos de origen de dichas empresas también deberían incluir la transparencia dentro de sus políticas.

Otro problema que surge de la

explotación de los recursos naturales, es el endeudamiento de las economías de los países ricos en recursos. Iolanda Fresnillo y Mónica Vargas explican el círculo vicioso en el que caen esos países: endeudamiento, explotación de los recursos, daños socio-ambientales y bajo impacto en el desarrollo de las comunidades locales y nacionales. A su vez, la búsqueda de sustitutos al petróleo está llevando a intensificar la producción de biocombustibles que presionan y perjudican los niveles de producción agrícola de los países en vía de desarrollo, profundizan el modelo agro exportador, desplazan la frontera agrícola y promueven la deforestación, como en el caso de Brasil.

Los estudios de caso presentados en el libro pueden ser divididos en regiones. Por una parte, están los países africanos, entre los que se trata el caso de Argelia. Este país es el principal proveedor de gas de España, y el artículo de Jesús García-Luengos muestra la evolución histórica de los problemas políticos y sociales del país con la explotación de los hidrocarburos. Una de las principales conclusiones de este capítulo es que a pesar de la riqueza en hidrocarburos, la población no se ha visto beneficiada en términos de desarrollo. Las rentas han tendido a crear intereses en torno a ellas que han impedido adoptar políticas económicas más responsables. Y las políticas exteriores de los países europeos no han contribuido a cambiar esa situación.

En el caso de Chad, Artur Colom muestra las dificultades del modelo adoptado allí por el Banco Mundial. Éste buscaba responder al mismo tiempo al pago de la deuda contraída con el

Banco y a la reducción de la pobreza. Los obstáculos de dicho modelo se relacionan con dificultades técnicas e intereses políticos; las debilidades estructurales e institucionales junto a las imposiciones externas, evitaron que el modelo fuera bien gestionado. Y los conflictos sociales dificultaron el surgimiento de una sociedad civil, capaz de presionar al gobierno y a las empresas. Ese mismo obstáculo está presente en Guinea Ecuatorial, donde solo quienes apoyan al gobierno se benefician a nivel económico. Este país también es un ejemplo de cómo pueden presentarse unos indicadores macroeconómicos positivos junto al mantenimiento de condiciones de vida precarias entre la población. Plácido Micó plantea que allí el gobierno ha sabido utilizar —a nivel interno e internacional— el poder que ha ganado con el petróleo, evitando que organismos internacionales fiscalicen la situación de derechos humanos.

Por el lado de América Latina, hay que tener en cuenta que los procesos socio políticos que ha sufrido la región andina en los últimos años, guardan relación con los modelos de explotación de los hidrocarburos. En el caso de Bolivia, se ha dado lo que Marc Gavaldà denomina una “nacionalización inconclusa”, en medio de un equilibrio entre la explotación de los recursos a favor del desarrollo, frente a la conservación de reservas naturales. Aunque el estado ha ganado mayor control, por ejemplo en la fijación de precios, el autor plantea que en varios puntos geográficos del país está en juego la conservación de las reservas naturales. A pesar de la presión de algunas poblaciones para pedir una indemnización, varias zonas van a verse afectadas si el estado no cambia su

modelo de fiscalización en la explotación de los hidrocarburos.

Los conflictos socioambientales tienen un lugar protagónico dentro de la conflictividad presente en Perú. Marco Arana destaca que las actividades mineras se llevan a cabo sobre todo en las zonas más afectadas por la pobreza, y que el mayor dinamismo económico no se ha traducido en la reducción de esa problemática. El autor resalta los impactos negativos sobre la salud, así como la represión que las autoridades y los grupos de seguridad privada ejercen sobre quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, en el caso de Colombia, Pedro Ramiro y Aloia Álvarez critican las políticas del gobierno colombiano, en la medida que éste ha buscado vender una imagen de seguridad, en medio de una realidad de represión, violaciones a los derechos humanos y desplazamientos forzados. Los autores resaltan la “corresponsabilidad” que las empresas multinacionales tienen en esos hechos, al apoyar a algunos actores del conflicto (sobre todo a paramilitares) y al fomentar directa o indirectamente el desplazamiento forzado de población, que afecta especialmente a poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Hay que resaltar que este libro abre debates interesantes, por ejemplo, sobre la conveniencia o no —a nivel de desarrollo, derechos humanos, medio ambiente, etc.—, de explotar los recursos naturales a través de la nacionalización, o de concesiones a empresas privadas. También sería interesante profundizar en un futuro en el tema de la efectividad y los desafíos de las campañas actuales en favor de la transparencia.

***Jairo BAQUERO MELO** es economista y ha cursado el Máster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, y el Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid.